

Uruguay muestra la mayor estabilidad política y social de América Latina, contabilizando once años de elevado crecimiento ininterrumpido (el PIB ha aumentado un 75% entre 2003 y 2013), y según un reciente informe del Banco Mundial, el ingreso real por habitante del país -medido por Paridad del Poder Adquisitivo- se sitúa como el primero de América Latina (17.343 dólares).

Por su pertenencia al MERCOSUR, ofrece un mercado ampliado de 270 millones de consumidores, y casi 400 millones si se suman otros países sudamericanos con los que el MERCOSUR tiene acuerdos de complementación económica, como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Además, Uruguay tiene un Tratado de Libre Comercio con México.

En los últimos años Uruguay se ha posicionado como un destino seguro y atractivo para los inversores extranjeros, y una muestra de ello es el hecho que desde el año 2000 Uruguay multiplicó por 20 la IED. Motiva este crecimiento una normativa especialmente favorable para las inversiones extranjeras, que reciben el mismo tratamiento que las locales y no requieren autorizaciones previas. Pueden acceder al régimen de promoción de inversiones uruguayo, que incluye importantes beneficios fiscales, además de no existir restricciones a la repatriación de capitales, ni a la transferencia de beneficios, dividendos e intereses, ni tampoco para la compra o venta de divisas. Asimismo, cuenta con otros mecanismos atractivos para captar inversiones como la Ley de Participación Público Privada (PPP) o la Ley de zonas francas, puertos y aeropuertos libres. Este clima favorable a las inversiones se ha visto reflejado en el grado inversor que han concedido a Uruguay la principales las calificadoras internacionales.

Por lo que se refiere a la relación bilateral con España, existe un completo marco institucional que otorga un ambiente de seguridad a las inversiones españolas, integrado por un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPRI), un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) y un Convenio en materia de Seguridad Social. De ello se han beneficiado las 80 empresas españolas que se encuentran actualmente implantadas en el país, principalmente, del sector servicios (banca, seguros, telefonía móvil, etc.) aunque también industriales, de construcción, infraestructuras y energías renovables, entre otros.